Versiones normativas versus la realidad práctica: El *Thaki* en la política comunal andina

*Alison Spedding Pallet**

Casi todos los estudios sobre sistemas de autoridades en los Andes rurales repiten que los cargos comunales forman un thaki, o 'camino' en Aymara, por el cual todos los comunarios varones deberían pasar; este 'camino' es representado en forma de una serie de peldaños ascendentes por los cuales se debe pasar, cumpliendo cada cargo en orden jerárquico. Sin embargo, una lectura acuciosa de las publicaciones de referencia devela que esto es más bien una versión normativa y hasta una reconstrucción ideal, sin ubicación precisa en el tiempo, de la o el investigador. Este artículo responde con la presentación y análisis de las carreras reales de diversos comunarios en una comunidad yungueña, demostrando que en la práctica se hace los cargos en un orden mucho más errático y no todos hacen todos los cargos, ni mucho menos, y termina animando a otras personas a recoger similares datos empíricos para llegar a una comprensión menos idealizada de estos sistemas políticos.

Palabras clave: *Thaki, sistemas de autoridades, Yungas, mujeres.*

Normative versions versus practical reality: The *Thaki* on the andean communal politics

Almost all studies of local authority systems in the rural Andes repeat that community leadership posts form a thaki, or 'path' in Aymara, which all male community members must follow; this 'path' is represented in the form of a series of ascending steps which one should climb, complying with each post in hierarchical order. However, a close reading of the referred publications reveals that this is in fact a normative version, and even an ideal reconstruction, without a precise date, on the part of the researcher. This article replies with the presentation and analysis of the real careers of various community members in a community in the Yungas, demonstrating that in practice posts are assumed in a much more erratic order and not everyone complies with all, or even the greater part, of the posts, and ends encouraging others to collect similar empirical data so as to arrive at a less idealized comprehension of these political systems.

Keywords: *Thaki, authorities' system, Yungas, women.*

Thaki*, o *thakhi según algunos autores, significa literalmente 'camino', 'senda', 'carretera' en aymara. En el contexto de la política comunal, específicamente el sistema de cargos o puestos políticos, tiene un sentido metafórico:

"...es la palabra utilizada en la cultura aymara para explicar cómo cada persona adulta va avanzando en responsabilidad y reconocimiento dentro de la comunidad a través del cumplimiento progresivos de cargos de autoridad y servicio. El *thakhi* de cada comunario adulto es... la secuencia de cargos y responsabilidades públicas por lo que un determinado comunario va "caminando" en el correr de los años hasta llegar a ... el máximo

* Antropóloga, docente de la Carrera de Sociología, Universidad de San Andrés, La Paz. E-mail: mahuaaco@hotmail.uk.com

reconocimiento y prestigio” (Albó y Ticona 1997:66).

Según la sabiduría convencional de la antropología andina, el *thaki* está vigente tanto en las comunidades originarias que mantienen sus sistemas de autoridades tradicionales, como en las ex haciendas cuyas autoridades ahora tienen la forma de sindicato agrario. En ambos casos, un individuo se inicia en el *thaki* a partir de ‘casarse’, o más específicamente, establecer una unidad doméstica independiente con su pareja (poco importa si hayan pasado por el matrimonio civil o no, siempre que sean reconocidos socialmente como marido y mujer) y tiene posesión legítima (de nuevo, no importa si esta además tenga base legal o documentada) de algún terreno dentro de la comunidad. Entonces entra en la lista de la comunidad (‘se afilia’ en la jerga sindical) y pronto, a veces de inmediato, es nombrado o elegido para algún cargo, generalmente de nivel muy bajo. Lo ejerce durante un año, luego ‘descansa’ durante unas dos o tres gestiones, entonces pasa a ocupar otro puesto, y así sigue durante unas décadas hasta que, siendo ya maduro (tal vez entre los 40 y 50 años de edad) llega a ocupar el cargo de máximo jerarquía al nivel de la comunidad, que puede llamarse secretario general, *jilaqata*, *malku* u otro según la costumbre local:

‘A partir del momento en que un miembro de la comunidad ... se casa, debe pasar por cada uno de los peldaños –cabecilla folklórico, kamana, alcalde escolar, preste, jilaqata, jiliri– que conducen a la condición de “pasaru”, de gran prestigio y respeto en toda la comunidad’ (PROA 1999:50).

Pasaru es una aymarización de ‘pasado’ y significa literalmente que haya ‘pasado’ todos los cargos. Por lo tanto, ya queda liberado de la obligación de seguir realizándolos, aunque se dice que mantiene un rol como consejero o de consulta para las autoridades en ejercicio referente a casos problemáticos.

La lista de cargos en la cita previa refiere a ‘los aymaras de Machaca’, el mismo grupo estudiado por Albó y Ticona y considerado icónico dentro de las diversas *markas* (‘pueblos’, unidades políticas regionales) del Altiplano Norte por su reputada fidelidad a las tradiciones andinas e incesante ‘rebeldía’ frente a las imposiciones de los gobernantes coloniales y republicanos. Los detalles de los cargos y sus nombres –que pueden variar incluso entre comunidades de una misma *marka*– no importan, sino que cuentan como ‘peldaños’:

“Vemos entonces que hay un *thakhi*, un camino que tenemos que recorrer. En este camino se encuentra el conjunto de los cargos comunales. Tenemos entonces un *thakhi* ascendente, que va llevando al comunario hacia su plena madurez y aceptación dentro de la comunidad. Cada cargo es como un peldaño que está realizando con la responsabilidad ante la comunidad...” (Simón Cussi, Delfín Calle, Antonia Mamani 1999:63; citado en Chuquimima 2006:142).

En algunos trabajos estos ‘peldaños’ llegan a ser graficados literalmente en la forma de una gradería, cada una portando el nombre de un cargo, desde el más inferior hasta el más importante. El argumento es que: (1) todos empiezan en el primer peldaño y terminan en el último y (2) suben estas gradas una por una, sin saltar peldaños y mucho menos saltando arriba para luego bajar a una grada inferior, aunque sea para terminar habiendo cumplido con cada uno de los cargos correspondientes.

No cuestiono que, sea lo que sea el conjunto efectivo de cargos que exista en una comunidad dada (como veremos, pueden ser pocos o muchos), hay una jerarquía o ordenamiento formal entre ellos. Estoy enteramente de acuerdo que existe un consenso fuerte, e impuesto en la práctica comunal, que todos los que detienen terrenos dentro de la comunidad tienen el deber de ‘hacer cargos’. Cuando conversan con un antropólogo sobre el tema, supongo que varios informantes ha-

yan dicho ‘todos tenemos que hacer cargos’, ‘todos hacemos los cargos’, y en el curso de la misma u otra conversación hayan señalado cuál o cuáles son los cargos iniciales, digamos apto para principiantes, y cuáles son las que se considera más exigentes y responsables y, en consecuencia, aptos para personas con experiencia y madurez. Es decir, hay un consenso generalizado sobre esta normativa. Lo que no he visto, en la vasta mayoría de los trabajos (éditos e inéditos) que he tenido la oportunidad de leer, es un registro de las carreras comunales de individuos empíricos que demuestran qué cargos realmente hicieron, en qué orden y a qué intervalos de tiempo (tanto el tiempo medido por fechas como el tiempo medido por las etapas de ciclo de vida).

Es más: una relectura atenta de algunas de las fuentes clásicas sobre el tema me ha revelado que la misma descripción etnográfica del ‘sistema de autoridades’ y su jerarquía de cargos resulta ser *sintética*. Es una construcción de el o los autores en base a datos de diversas fuentes e informantes, que pueden incluir la observación directa o registro por parte del mismo antropólogo, no siempre en el mismo lugar o dentro del mismo período (corto) de tiempo, como relatos de informantes sobre lo que ellos mismos o terceros hayan hecho, visto o escuchado sobre lo que se hacía ‘antes’ –un ‘ante’ que puede carecer de una ubicación concreta referente a las fechas– y referencias, que muchas veces son las más fáciles de obtener, sobre lo que se *debe* y/o *debía* hacer tanto ‘ahora’ como ‘antes’. Algunos autores, como Astvaldsson, son más o menos explícitos sobre el proceso de reconstrucción. Su metodología es mucho más clara en su tesis doctoral en inglés (Astvaldsson 1994)¹ que en la versión publicada en castellano (Astvaldsson 2000), que más enfatiza la colaboración esencial de Félix Laymi (con el mensaje subyacente ‘vean qué políticamente correcto soy y por tanto mis resultados son incuestionables, pues trabajé con un *informante nativo*’) en el trabajo de campo, dejando para el final del acápite la revelación

que se trata de ‘pruebas *reconstruidas*’ (énfasis mío: Astvaldsson 2000:50), es decir, un artefacto del investigador y no algo que pudo observar o registrar directamente.

Ya que las evidencias de incumplimiento con esta versión ideal o construida en la actualidad suelen estar a la vista, es frecuente que, hablando de ‘ahora’, se destaca que hay cargos que han caído en desuso, o que se cumple pero de manera deficiente, por ejemplo descartando elementos rituales, o aceptando a personas sin los prerrequisitos de edad o antecedentes de cargos previos; pero la suposición, y tal vez la aseveración explícita, es que ‘antes’ sí se cumplía con todo a pie de la letra. Y en los informes de investigación más ingenuas (o productos de un trabajo de campo más superficial) se acepta que así fuera en el pasado, y a veces que sigue así hasta hoy. Hasta los que se dan cuenta que la realidad actual no corresponde a la versión normativa, suelen suponer que este decaimiento es reciente:

“La norma del *thakhi* ha sufrido un inexorable cambio político. Ahora esta norma esencial de acceso a los cargos es elástica y flexible. El joven puede empezar sus primeros cargos en los de mayor responsabilidad; asimismo, puede ocupar cargos de menor responsabilidad” (Quisbert, Callisaya y Velasco 2006:53).

Implícitamente, había una época en el pasado cuando las reglas de acceso a los cargos no eran flexibles, sino todos seguían el orden jerárquico. Sin embargo, dicha relectura me ha dejado con dudas sobre cuándo todos los cargos que conforman el orden sintético-ideal entraban efectivamente en ejercicio –aparte de la cuestión de si, incluso aceptando que la construcción intelectual del investigador sí representa lo que en algún momento era el orden normativo vigente, todos los comunarios realmente cumplían con todos esos cargos, o si no, quiénes realmente cumplían y en qué orden. Es cierto que, en ausencia de registros escritos (o al no poder acceder a ellos aunque los haya), es difícil conseguir datos fidedignos sobre qué individuos hacían

cuáles cargos y menos si los hacían bien o mal; es fácil recordar y exponer el orden normativo –como hacen Cussi, Calle y Mamani en la cita arriba– que a la vez mantiene la fachada moral y cultural tanto del informante como de las demás personas que habrían hecho de autoridad: ‘el *thakhi*, entendido como una escuela “donde las personas se formaban para servir a su comunidad” (Héctor Triguero, Sullkatiti Lawaqullu)’ (Plata, Colque y Calle 2003:57). Mientras relatar a un extraño sobre las carreras de Pedro o Juan, con sus errores y desviaciones incluidas, no sólo puede traer problemas con ellos o sus descendientes, sino corresponde a lavar los trapos sucios de la comunidad en público, un acto generalmente considerado como ‘traición’ y susceptible a sanciones si es descubierto. Pero aún así, tengo la impresión que la mayoría de los antropólogos que se han interesado por los sistemas de autoridad comunal ni siquiera han intentado ir más allá de la versión normativa, como por ejemplo preguntando al informante adulto mayor que acaba de describir cómo eran las autoridades de antes, qué cargos ha hecho él mismo (y en caso de responder a tal pregunta, es posible que sólo va a indicar que los hizo bien y no va a mencionar los para los cuales esquivó el nombramiento, o sólo hizo lo imprescindible y eso mezquinamente; o si no va a aseverar que tuvo un ejercicio más completo que lo que realmente era, como veremos luego en la parte empírica de este ensayo).

En este artículo, primero voy a demostrar la naturaleza sintética de la descripción del sistema de cargos en Jesús de Machaca, tal como lo presentan Albó y Ticona (1997). Enfoca esta obra por ser considerada referencia fundamental, hasta se podría decir clásica, en la bibliografía de consulta sobre este tema,² a la vez que –a diferencia por ejemplo de Astvaldsson– no explicita que su versión es una construcción de los investigadores, si no se requiere una lectura acuciosa para detectar esto. Otro clisé usado para insistir de que ‘antes’ la versión normativa sí o sí representaba la realidad, es argumen-

tar que si ya no se observa en la práctica, esto se debe a la aculturación causada por la imposición del sindicalismo agrario, que ha corrompido la pureza de los sistemas de autoridad originaria; para evaluar esto, voy a referirme brevemente a algunos estudios de tales sistemas en el Altiplano, pero enfatizo que las autoridades comunales actuales, no importa cómo se denominen, deben su marco organizativo al sindicalismo antes que a las tradiciones supuestamente originarias, pero esto no les quita su validez –una posición ya expresada por Chuquimia, Chambí y Claros (2009). Luego presentaré el meollo empírico: un análisis de los *thaki* seguidos por varios comunarios de la comunidad de ‘Takipata’³ en Sud Yungas, entre 1980 y 2006, con algunos datos de años posteriores. Es un análisis preliminar de estos mismos datos, y las conclusiones serán igualmente preliminares; mi esperanza es que, antes de descartarlas de antemano aseverando que ‘Yungas es aculturado’ (argumento que he escuchado varias veces al debatir con colegas en base a mi trabajo de campo), otros antropólogos y antropólogas se pondrán a buscar datos equivalentes de otras regiones andinas para ver hasta qué punto la pauta que observaré es, o no es, ‘representativa’, en qué aspectos y por qué motivos. La revisión bibliográfica realizada hasta la fecha no ha encontrado un solo estudio que efectivamente reproduce estos datos de carreras reales de personas reales.

Sincrónico, diacrónico o flotando en el tiempo: fechando los sistemas de autoridades

El capítulo 3 de Albó y Ticona (1997) se titula ‘El *thakhi* comunal’. Supongo que el presente etnográfico del texto, como se suele asumir, aunque no se suele declararlo, corresponde a los años inmediatamente anteriores a su publicación, es decir, la primera mitad de los años 1990 (y luego un par de años para redactar el libro). Pero vemos el primer párrafo del capítulo:

“Es dentro de la pequeña comunidad donde mejor se mantuvo siempre el esquema tradicional de gobierno sin interferencias exteriores. En este capítulo presentaremos los rasgos principales de este esquema, tal como se ha mantenido por lo menos hasta la época de la sindicalización campesina, tras la reforma agraria de 1953” (op. cit.:65).

Entonces, deduzco que el presente etnográfico de lo que sigue es más bien antes de 1953. Pero la primera nota de pie al respecto indica que la información en que se basa fue ‘recogida por Xavier Albó en diversos momentos desde 1971 hasta el presente’ (ídem.), es decir, desde los años 1970 hasta mediados de los 1990, y refiere como otra fuente la mencionada tesis de Astvaldsson, defendida en 1994 y posteriormente publicada en castellano en 2000. Su trabajo de campo es mayormente de 1990-1991 (Astvaldsson 2000:44) pero hace mucho uso de relatos sobre el pasado y rituales de las autoridades, rituales aún parte de la memoria viviente, pero “actualmente en desuso” (op.cit.:123) y al analizar el léxico de los relatos orales en aymara que él recogió, hace uso incluso del diccionario aymara de Bertonio, que es de 1612. Entonces su construcción sintética cubre una extensión en el tiempo mayor que la de Albó y Ticona. Éstos dicen haberse centrado en la comunidad de Sullkatiti Titi-ri, por ser una de las que “se han mantenido más tradicionales, por lo menos hasta 1975” (Albó y Ticona 1997:65; no indican que pasó después de 1975 para quitar ese tradicionalismo) y en otra nota mencionan informantes de Yawriri, Parina, Titik’ana Siwinqani y Titik’ana Takaka: sin datos sobre cuándo conversaron con esas personas, ni sobre los períodos que ellos describieron en esas conversaciones. Al fin: “...aunque los datos han sido recogidos en épocas más recientes, en el texto intentamos reconstruir lo que al parecer ocurría ya desde antes...” (op. cit.:66).

‘Desde antes’ a mí me deja desubicada en el tiempo, pero digamos que sería ‘antes de 1953’ –sin saber cuánto antes; en todo caso, antes de que cualquier de los autores, u otros

académicos cuyos trabajos utilizan, estaban en la región. Al final del capítulo 10, hay dos gráficos– precisamente con la forma de gradaría antes mencionada –sin número de página: 3.1A y 3.2B son dos versiones ‘antes de 1950’ (con nombres de informantes, pero sin indicar si ellos mismos hayan vivido y pasado por esos cargos, o si se basan en lo que los contaban sus mayores) y 6.1 (mal referido en la p. 194 como 5.1, y las otras dos como 3.2 y 3.3) que representa la ‘relectura de cargos sindicales y administrativos ... 1980-1990’ sobrepuesto a las gradas del ‘*thakhi* tradicional’. Mientras en los primeros dos gráficos los *pasäru*, en la grada más alta, ya no tienen obligaciones, en el tercero ellos pueden ser ‘subcentral, central ... registro civil, corregidor ...’. Por supuesto, son puestos o cargos que no existían antes de 1950, excepto el de corregidor, que habría sido ‘comunalizado’ (ocupado por comunarios en vez de vecinos). El registro civil fue establecido en 1940 pero su ejercicio tardó en generalizarse en las provincias, y durante décadas el único requisito para optar a este cargo era tener ‘buena letra’; sólo por inicios del siglo XXI se ha institucionalizado un concurso con examen escrito para acceder a este puesto. Es posible que en algunos pueblos se impuso tener antecedentes de autoridad comunal, tal vez incluso sin tener buena letra o letra alguna (de la misma manera en que, como veremos, un analfabeto total o funcional puede ser elegido como Secretario de Actas, y otra persona escribe las actas en su nombre); pero entonces ir a ese cargo sería una formalidad que la mayoría intentaría evitar a todo costo.

Los cargos de subcentral y central son netamente del sindicalismo campesino; puede existir la obligación formal por parte de cada comunidad afiliada de mandar un representante a esta instancia supracomunal, para luego nombrar el dirigente principal (Secretario General) en base a votación, o sino según una rotación establecida entre las comunidades, pero en todo caso nunca es obligatorio para todo comunario pasar por estas instancias. Su percibida irrelevancia a nivel

cotidiano hace que sólo sean apetecibles por esos individuos con tendencias de activismo político y/o intenciones de hacer carrera en la dirigencia y tal vez la política municipal y hasta nacional; éstos suelen ser de hecho ‘jóvenes’,⁴ quienes no están totalmente comprometidos con un futuro campesino, mientras un comunario que haya logrado el estatus de *päsaru* según el esquema de Albó y Ticona estaría completamente dedicado a sus actividades agropecuarias y sin interés alguno en ‘perder tiempo’ yendo a reuniones y otras actividades por las cuales no recibe sueldo. Según mi experiencia en Sud Yungas, hasta fines de los 1990 las (sub)centrales eran instancias nominales que casi nunca se reunían. Entonces, comunarios mayores con trayectoria dentro de su comunidad, pero sin interés de ir más allá, eran nombrados para la central en el entendimiento que no iban a tener que hacer casi nada. Después de 2000 se han activado –por motivos relacionados con la Ley de Participación Popular, entre otros, pero siempre dirigidos ‘hacia arriba’ (nivel municipal, departamental, etc.).

Quisbert et al. (2006) mencionan el nivel de subcentral como uno para el cual se puede nombrar a ‘jóvenes’ con experiencia mínima en cargos anteriores, pero dispuestos a asistir para ver qué contactos y conocimientos puedan conseguir. En otros casos, la razón para nombrarles puede ser que tienen niveles de educación formal y experiencia fuera de la localidad, que resultan necesarios para ser una autoridad efectiva hoy en día. Más que ver esto como una ruptura con el *thaki*, que es como lo perciben esos autores, prefiero analizarlo en términos de la evolución de los diferentes niveles de la organización campesina-comunal en el tiempo y el marco nacional englobante. En Jesús de Machaqa, lo que era la Central Campesina Agraria de Jesús de Machaqa ha revertido a su nombre colonial de Cabildo, mientras los Secretarios Generales de las comunidades ya se llaman Mallku, y el dirigente en jefe de lo que eran Subcentrales, Jach’a Mallku: “en teoría, sólo quienes han pasado el cargo de *Mallku* pue-

den ser considerados para el cargo de *Jach’a Mallku*, y así sucesivamente” (Colque y Cameron 2009/2010:178; subrayado mío). Sin embargo, a diferencia de su contraparte de ‘antes’, el actual Cabildo asume el rol de fiscalizar las cuentas municipales e intervenir en la distribución de fondos para obras y proyectos de desarrollo en las comunidades, actividades para las cuales se requiere conocimientos técnicos (por ejemplo, de contabilidad y leyes) para ser efectivo. “Por ejemplo, un *Jiliri Jach’a Mallku* elegido para dirigir el Cabildo ... fue considerado ineficaz ... a quien el alcalde lo describió como “un cero total” ... pero él fue elegido para el cargo respetando el sistema del *thaki*” (op. cit.:195). Albó y Ticona tienen razón hasta cierto punto en aseverar que el nivel de comunidad de base es el que menos ha cambiado, o sido afectado, en el curso de las décadas y –quizás– hasta los siglos; pero decir que *menos* ha cambiado, de ninguna manera quiere decir que *no ha cambiado* y punto – aunque eso es la posición implícita de varios autores que hablan del ‘modelo del ayllu’ (y por extensión, su sistema de autoridades) como un esquema atemporal.

¿Qué es una autoridad originaria?

Rasnake (1989) es un trabajo excepcional que hasta ahora no ha sido reproducido con otro objeto de estudio y cuyas lecciones han sido en general ignoradas. Es excepcional en tanto que, en vez de dar por supuesto lo ‘inmemorial’ de los sistemas de autoridad local en los Andes, intenta rastrear toda la información disponible sobre la organización política de lo que (al menos cuando hizo su trabajo de campo alrededor de 1979-1980) era a la vez el ‘ayllu Yura’ y el ‘cantón Yura’ en Potosí, a partir de la conquista, y así identificar tanto los cambios como las continuidades. Entre los resultados de su análisis está la deducción que el actual esquema de autoridad rotativa con gestión corta en el tiempo se habría instalado firmemente alrededor de 1880; conclusión que, de paso,

me parece más acertada que la opinión de Sinclair Thompson, de que este sistema se habría instalado ya nomás después de que la crisis del cacicazgo llegó a su culminación en la Gran Rebelión de 1780-1782; así, este sistema ahora enarbolado como lo auténticamente 'andino', en términos históricos es de origen republicano, mientras si buscamos restaurar el Tawantinsuyu sería de volver a autoridades hereditarias, de casta y dinastía, y vitalicias. Pero no es mi intención discutir la trayectoria histórica en este momento, sino destacar lo que Rasnake dice sobre los cargos originarios de Yura en su presente etnográfico: cuatro kurakas, cinco alcaldes y diez jilaqatas. Para empezar, "no existe ... un orden regular para cumplir con estos diversos cargos ... Por ejemplo, no es necesario haber sido previamente jilaqata para ser alcalde ... algunas parejas sirven como jilaqatas hasta dos veces" (Rasnake 1989:68). Tampoco es obligatorio que todos hagan todos los cargos; dado que los familiares cercanos suelen colaborar a la autoridad, puede ser suficiente que uno de un grupo de hermanos haga el cargo más alto, el de kuraka, para dispensar a sus demás hermanos de esa obligación. Según Rasnake, cuando él hizo su trabajo de campo los kurakas no tenían que "proporcionar las cantidades de chicha y alcohol que, por ejemplo, debe ofrecer el jilaqata en Corpus" pero todavía debían proporcionar una cantidad determinada de chicha en "por lo menos seis ocasiones (por año, supongo) y es que varias otras fiestas han sido eliminadas en tiempos recientes" (op. cit.:82).

Esto es comparable con otro ayllu de los valles de Potosí, Calcha, estudiado por Frías (2002), que consta que sólo los que disponían de una buena extensión de tierras regadas de valle para producir maíz, y con eso, chicha, necesaria para cumplir con las obligaciones festivas, podrían ocupar los cargos principales. Algunas quebradas eran tan angostas y desprovistas de buenas tierras que sus habitantes nunca eran considerados para ser kuraka, sino sólo servían como camachi, ayudantes y mensajeros del kuraka (Frías 2002:

44-45). Todo apunta a que, mientras vamos retrocediendo en el pasado, esta generosidad festiva obligatoria implicaba gastos mayores que iban ascendiendo a su vez en tanto que el cargo era de mayor jerarquía, y por tanto, eran cada vez menos los que pudieran aspirar – o ser escogidos – para tal puesto. Esto es más notable en regiones como Yura o Calcha, donde la geografía accidentada trae consigo calidades y extensiones muy desiguales de tierras cultivables, según el ayllu menor o local donde cada uno haya nacido y/o se haya casado y heredado tierras. En estas regiones no hay indicio que en algún momento las tierras con riego en el fondo de los valles – las de más valor y cuya producción es socialmente significativa – eran de propiedad comunal o sujetas a algún tipo de redistribución.

Un ejemplo de un sistema de autoridades originarias más 'puro' trata de AQAP (Ayllu Qallapa Abajo Primero) en Oruro, en la orilla occidental del lago Poopó. Sus terrenos en su mayoría son planos y relativamente uniformes, y se reparten en varios aynuqas, es decir campos de descanso rotativo, para el cultivo de papa y hoy en día principalmente, quinua. El sistema de distribución y tenencia de la tierra es complicado y no viene al caso aquí (ver tesis de sociología de Jaime Mamani, en preparación) más que decir que el acceso a la tierra es bastante equitativo, y también lo es el cumplimiento como autoridad. Sólo hay tres cargos en todo el sistema. El primero es el qamani que debe cuidar los cultivos de las aynuqas. Uno es nombrado a este cargo a una edad de entre 10 a 15 años; en realidad, el padre le hace nombrar y es el padre que realiza las tareas en persona. Con eso, la persona ya está en la lista, y desde ese momento ya está determinado qué cargos tendrá que hacer y en qué año. 15 años más tarde (ya con una edad alrededor de los 30) le toca pasar la fiesta patronal. Después 'descansa' otros 15 años y, según las aynuqas que le tocaban como qamani, tiene que cumplir como cacique, alcalde o corregidor. Los padres inscriben a sus hijos como qamani cuan-

do tienen entre 10 a 15 años para que lleguen a uno de estos cargos principales teniendo entre 40 a 45 años. Personas huérfanas o cuyos padres no se preocupaban, pueden iniciar su carrera por voluntad propia alrededor de los 25 años, pero en consecuencia tienen cerca de 60 años al culminarlo y muchas veces ya no están en condiciones para responder, sino tienen que pagar una suma elevada a la comunidad en vez de realizar el cargo.

Como dije, en muchos aspectos este sistema se acerca a lo ideal que figura en los textos: ‘todos’ los comunarios entran en condiciones iguales y cumplen los cargos en un orden fijo. Aquí quiero destacar otros elementos de este sistema, que no suelen figurar en la versión recibida (o de clisé) que circula en la antropología andina. Uno: son muy pocos cargos. Dos: sólo los cargos finales son políticos propiamente dichos, y sus funciones son muy amplias y generales. Personalmente, al hablar con el tesista que ha estudiado esta comunidad, me sorprendió al descubrir que no existe un cargo específico que redacte actas de reuniones, compromisos y demás, sino al parecer cuando hay que redactar algo lo hace cualquier persona que esté presente, capaz y dispuesta; tampoco hay, por ejemplo, un cargo que debe ocuparse de la mantención de los caminos, tanto carreteras de acceso a la comunidad como las ‘de herradura’ usadas por personas a pie y animales de carga –tema que, yo creo, siempre ha debido ser importante, y hoy en día cuando el transporte automóvil es factor central de la economía, ha cobrado una importancia mayor. Sino, en este contexto, cuando sea necesario hacer algo referente al camino, los cargos principales tienen que movilizarse según el caso, y lo mismo para cualquier otra necesidad comunal que surja. Tres, más que incluir deberes festivos como parte de los cargos, uno de los tres conjuntos de cargos que hay es exclusivamente festivo –aunque asumir como preste o alférez (cada uno con responsabilidades definidas) de la fiesta patronal sólo vale como *cargo* cuando se lo asume en la gestión que le corresponde

a uno en la lista, no vale haberlo hecho por opción personal de ‘devoción’, aunque con gran fastuosidad, algo que unos residentes han intentado hacer valer en años recientes. Los demás cargos tienen ciertas obligaciones tipo festivo, como proporcionar comida a todos los asistentes en las pocas reuniones generales que es obligatorio celebrar en el curso del año, pero dado que se sabe de antemano cuándo habrá que asumir esa obligación, todos están en condiciones de ahorrar para cubrir los gastos expectables.

En suma: hay sistemas ‘originarios’ que se asemejan a la versión ideal-normativa –y hasta existen listas escritas que lo demuestran– pero al parecer hay pocos que se mantienen así; tampoco se sabe desde cuándo han sido institucionalizadas con esa forma, ni se ha analizado los contextos ecológicos y históricos que hubieran promovido estos sistemas que, al menos en su variante más equitativa, no son nada típicos. Y finalmente, se trata de comunidades que, por uno u otro motivo (en parte su activa resistencia, legal, violenta o lo que sea, pero mayormente por tener pocos atractivos económicos en las épocas de expansión terrateniente) jamás fueron incorporadas al sistema de haciendas. Poco se sabe del rol de las autoridades originarias en el proceso de incorporación de las que sí pasaron a ser haciendas, pero los pocos datos que hay apuntan a que se prestaron a colaborar antes de resistir o defender, desde esos caciques de la colonia temprana que simplemente vendieron las tierras (con los habitantes incluidos, al parecer) a españoles, hasta esos jilaqatas republicanos que asumieron el rol de capataces, organizando y controlando a sus súbditos en el trabajo para la hacienda, y estereotipados como *llunk'u* del patrón. Cuando llegó la Reforma Agraria, era requisito legal para liberarse del patrón conformar un sindicato agrario, no importa que – como era frecuente en los años 1950– la gente no sabía de qué se trataba más allá del nombre; pero además, las autoridades originarias no habían mantenido un prestigio tal como para que la gente hubiera querido pedir que volvieran como alternativa al sindicato.

El rechazo abierto a ellos que se registra en algunas regiones –atacarles, quitarles sus ponchos, prohibir que las nuevas autoridades sigan manejando los símbolos tradicionales de autoridad– puede representar no sólo una sumisión ciega a la imposición externa de una modernización occidentalista que igualaba cualquier emblema andino con el atraso y la barbaridad, sino indicio de la identificación de esas autoridades con el servilismo hacia los antiguos sectores dominantes, los ‘vecinos del pueblo’ de identidad criolla ahora derrotados. De ahí, las comunidades originarias optaron voluntariamente para convertir sus autoridades en sindicatos agrarios, porque era la vía más práctica para presentarse ante autoridades del gobierno central solicitando beneficios recién disponibles –por ejemplo, un ítem del magisterio para una escuela fiscal– pero también porque significaba tener autoridades que iban a ser posesionadas por dirigentes de la organización campesina, y ya no por autoridades de esos vecinos, como corregidor o subprefecto. El cambio podía corresponder a la vez a una transición generacional. Esto es algo que ocurre habitualmente en cada comunidad en fechas o épocas que responden a factores enteramente locales (la composición coyuntural de las unidades domésticas) pero entre mediados de los 1950 y mediados de los 1960 fue impulsado por la exigencia de burocratizar las organizaciones comunales, al menos en el nivel mínimo de tener un libro de actas y redactar la nómina de los dirigentes. Sólo la generación joven tenía suficiente capacidad de lecto-escritura como para hacer esto y entonces asumieron los cargos, aunque sea en nombre de sus padres.

Hubo regiones muy alejadas del Estado (y/o muy sujetas a la mediación a través de capas de dirigentes clientelistas) donde esta transición se retrasó hasta principios de los años 1980 e incluso entonces fue más o menos forzado por la llegada de agencias humanitarias que ofrecían el tipo de asistencia material que el Estado jamás había hecho llegar a esos sitios; tal como lo describen Rivera y equipo THOA (1992) para el Nor-

te de Potosí en el contexto de la sequía de 1982-1983. Al ver cómo dirigentes sindicales jóvenes y alfabetos sustituyeron a dirigentes mayores originarios para negociar con ONG asistencialistas y a la vez deshacer la organización interna de la comunidad, este grupo de investigadores y activistas generalizó la conclusión de que los sindicatos agrarios eran impuestos desde afuera y enteramente nocivos para las comunidades; había que fomentar la ‘reconstitución de los ayllus’, o sea, volver a las autoridades originarias –o al menos, a sus símbolos: vestirse de poncho, pollera y aguayo y traducir los títulos sindicales a aymara y quechua (el Secretario de Actas pasó a ser Qillqiri Mallku, el Secretario de Deportes a Anat Qamani...). Cuando, después de la caída del muro de Berlín en 1989, esos cooperantes que en 1982 veían la salvación del mundo en el sindicalismo pasaron a verlo en los pueblos indígenas, tales ‘uniformes’ (como los mismos comunarios los denominan) llegaron a cumplir el mismo rol de atraer fondos internacionales como los sindicatos postizos de 1982-1983; pero todo esto trata de temas fuera de mi alcance que exigen investigaciones empíricas y con una perspectiva más objetiva que la de –por ejemplo– Fernández Droguett, quien supone que, por ver ponchos y polleras en la Alcaldía de Jesús de Machaqa, “los indígenas se apropian del Estado y lo transforman en instrumento de su propio desarrollo y liberación” (2016:3). Además, involucran más que todo los niveles cupulares de las organizaciones indígenas originarias campesinas, como se les denomina oficialmente hoy en día. Mientras tanto, las comunidades de base siguen funcionando por la necesidad cotidiana (nadie más va a arreglar sus caminos o reparar sus aguas potables si ellos no se ocupan) y según sus propios criterios prácticos. Entonces, vemos cómo funciona el *thaki* en una de ellas: ex hacienda, sí, pero también cocalera de la zona tradicional y por tanto, involucrada desde hace siglos (y eso está comprobado, no es suposición) en una de las actividades más andinas que puede haber.

El *thaki* en una comunidad de Yungas

Los datos que siguen tratan de la directiva sindical y proceden de los Libros de Actas del sindicato agrario. No incluyen la junta escolar, los comités de aguas potables y de obras y de ADEPCOCA,⁵ organizaciones conocidas como ‘ramales’ que tienen sus propios libros de actas. De hecho, en esta comunidad los nuevos afiliados típicamente inician su carrera con un cargo en la junta escolar, y por tanto el primer cargo sindical no suele ser el primero que han hecho en sus vidas. La junta y la directiva sindical son nombrados en base a la votación sobre una terna nombrada verbalmente por las bases comunales en una reunión ordinaria (generalmente la del 30 de noviembre de cada año; la comunidad se reúne el último día de cada mes, no importa que día de la semana cae). El sindicato fue fundado en 1953, pero durante los primeros diez años de su existencia no se renovó la mesa directiva, y sólo en los años 1970 se estableció elecciones anuales de los dirigentes y una gestión de un año; existe la posibilidad de ser ratificado para un año más, pero esto raras veces ocurre. Los datos que analizaré aquí cubren los años desde 1980 hasta 2006, con algunos complementos de años posteriores (Tablas 1 y 2).

Nominalmente, la mesa directiva consiste en doce cargos, pero no siempre son los mismos. Los que siempre están presentes son Secretario General, Secretario de Relaciones, Secretario de Justicia, Secretario de Actas –‘las cuatro cabezas’– seguido por Secretario de Hacienda. Entre los cargos inferiores nunca faltan Secretario de Vialidad, de Deportes y Vocal. Este último siempre ocupa el puesto más bajo en la jerarquía. A principios del período estudiado figuraba Secretario de Educación (distinto a la junta escolar), suprimido a partir de 1987, y a partir de 1988 figura Vinculación Femenina. El Secretario de Prensa y Propaganda desapareció después de 1995. Secretario de Agricultura figura de manera intermitente, al igual que Policía Sindical, y entre 1985

y 1990 hubo un Secretario de Cooperativa. Secretario de Organización forma parte de la directiva a partir de 2001. Estos cambios hacen comprensible porqué, fuera de los cinco primeros y el último mencionado (Vocal), los mismos comunarios no siempre tienen claro el orden de los demás cargos, y aparte de Vialidad (hace trabajar los caminos), Deportes (organiza partidos de fútbol) y Vocal (toca la campaña para convocar a reuniones, mantiene limpio el local del sindicato), tampoco tienen una idea definida de qué deberían hacer sus ocupantes. Pero antes de entrar en más detalles, veremos unos ejemplos de carreras individuales.

Miguel es de una generación más joven que los otros cuatro de esta tabla, que ahora son todos abuelos (y Adalid falleció en 2014), por tanto, es poco probable que volvieran a hacer cargos, mientras que por su edad es muy probable que Miguel será nombrado de nuevo en años venideros. Con esto, su carrera asumirá la misma pauta que los demás, donde Secretario General no es la culminación, sino después de cumplirlo uno sigue asumiendo otros cargos de menor jerarquía. Secretario General tiene la particularidad de que no se suele repetir ese cargo (si Gabriel lo hizo, fue por haber sido removido la primera vez), pero como se observa en esta tabla, es posible repetir cualquier otro de los puestos en la directiva. Sólo Lázaro y Gabriel empezaron con cargos de mínima jerarquía, clásicamente considerados como iniciales, y ninguno de los cinco ha seguido un ascenso regular, sino brincan por arriba y por abajo en el orden de secretarías. Ni siquiera Gabriel, que suele declarar ‘Yo he hecho todos los cargos, menos Justicia’ realmente ha cumplido con todos.

Alejandro es solterón. Esto no ha sido obstáculo para que se afilie y haga cargos, pero supongo que explica por qué ha hecho tan pocos, no obstante ser considerada una persona capaz y consciente por encima de lo habitual. Aún así, su lista de cargos es apenas más escueta que la de Pablo, casado por lo civil y por la religión y padre de una familia

Tabla 1. Carreras plenamente cumplidas⁶

SERAFÍN	GABRIEL	ADALID	LÁZARO	MIGUEL
1980 Actas	1982 Vialidad	1981 Justicia	1981 Vocal	1994 Actas
1984 Actas	1983 Vialidad (ratificado)	1982 Relaciones	1986 Justicia	1995 Prensa y Propaganda
1986 Prensa y Propaganda	1985 Secretario General	1983 Relaciones (ratificado)	1988 General	1997 Hacienda
1987 Prensa y Propaganda Secretario General	1993 Educación	1985 Secretario General	1990 Vialidad	1999 Relaciones
1988 Prensa y Propaganda Relaciones	1994 Secretario General	1989 Cooperativa	1995 Educación	2000 Prensa y Propaganda
1990 Prensa y Propaganda	1997 Policía Sindical	1992 Agricultura	1997 Vocal	2001 Organización
1993 Agricultura	1998 Hacienda	1994 Educación	2009 Deportes	2006 Hacienda
1995 Hacienda	1999 Hacienda	2005 Hacienda		2013 Secretario General
2000 Actas	2000 Agricultura			
2002 Vialidad	2002 Organización			
2006 Deportes	2004 Relaciones			
2010 Actas	2006 Actas			
En 1984 fue elegido como Deportes, pero luego posesionado como Actas	En 1985 fue elegido General, pero en agosto fue removido del cargo y reemplazado por su entonces Relaciones, Adalid	Mayor que los otros cuatro (murió en 2014), es posible que Justicia en 1981 no fue su primer cargo		

Tabla 2. Carreras menos completas

PABLO	ALEJANDRO	DAVID	TOMÁS	ENRIQUE
1980 Deportes	1989 Actas	1981 Actas	1988 Deportes	1984 Educación
1993 Vialidad	1992 Secretario General	1990 Secretario General	1994 Relaciones	1994 Hacienda
1999 Secretario General	2009 Justicia	1996 Relaciones	1996 Actas	1996 Justicia
2012 Vocal		2004 Justicia	2000 Relaciones	1999 Justicia
		2009 Actas	2002 Relaciones	2003 Justicia
			2004 Secretario General	2005 Agricultura
			2009 Organización	2009 Relaciones
			2011 Justicia	2012 Justicia
En 1984 fue elegido como Actas, pero no posesionado. Uno de sus hijos hizo Vocal en su nombre en 2012				En 2009 y 2012 su hijo hizo los cargos en su nombre

numerosa. Pero estuvo lejos de ser un padre de familia idóneo: agredía constantemente a su esposa y a sus hijos, peleaba con su hermano sobre la herencia, contraía deudas que no pagaba, y en todos estos conflictos mostraba una total terquedad en defender su posición y no dar lugar a negociaciones ni consensos. Esto último, sobre todo, va en contra de la conducta esperada de un dirigente y puede explicar porqué la comunidad no le exigió más que un mínimo de cargos. Más extremo fue el caso de David, que tuvo tantos conflictos con tantos miembros de la comunidad que terminó expulsado de manera definitiva en 2012 y obligado a transferir todas sus propiedades a sus herederos. Dentro y, más que todo, fuera de las reuniones fue siempre muy ‘hablador’ y ejercía una influencia poderosa en las decisiones comunales;⁷ esta característica, compartida por Gabriel y (al menos en su juventud) Serafín, generalmente conduce a que uno sea nombrado con frecuencia para diversos cargos, pero David era en adición muy agresivo, egoísta y manipulador y buscaba provecho propio a través de sus cargos, otra conducta inaceptable. Cuando hizo su último cargo en 2009, los comunarios rehusaron firmar varias de las actas que él redactó porque estaban llenas de comentarios contenciosos y sesgos en contra de sus enemigos personales.

Finalmente, Enrique exhibe lo que se podría llamar una carrera ‘fracasada’: nunca llegó a ser Secretario General, aunque es casado y ha sido un padre ejemplar apoyando a sus hijos (ya tiene un hijo y una hija que son licenciados en Derecho de la UMSA) y hay una expectativa que todo comunario debe pasar por este cargo que es el más exigente en términos del tiempo y gastos económicos. Tanto personas conflictivas como otros de carácter muy débil como para asumir de autoridad, o simplemente irresponsables (pasaban buena parte de su año de gestión yendo de viaje y dejando los asuntos en manos de sus seguidores) han sido elegidas como General, así que ser menos que idóneo para el cargo no es en sí un obstáculo. Enrique no

es el único que ha pasado sin llegar al cargo principal. Unos dos que pasaron por cargos menores habrían sido librados por ser solterones de carácter retraído (en contraste con el extrovertido Alejandro); otro porque es cojo y se habría hecho una concesión a sus dificultades en mantenerse económicamente aún sin las exigencias adicionales del cargo, pero hay otro caso de un padre de familia sin taras notables que nunca ha sido elegido General. Y éste, como Enrique, ha terminado repitiendo el cargo de Justicia.

Esto es consecuencia de la forma de elección. Al menos en las últimas décadas, se suele nombrar primero una terna de cuatro personas, entre las cuales tiene que salir el próximo Secretario General –el más votado– mientras el menos votado de ellos asume de Justicia. Así, en 1996, 1999 y 2003 Enrique fue propuesto entre esos cuatro porque ya era tiempo que haga General, pero siempre fue el menos preferido por los votantes. Cuando se hizo un intento final de obligarle a cumplir ese deber, en 2012, ya había pasado el ejercicio activo de sus cargos a su hijo (el que iba a titularse de abogado). Parece que su particular defecto es no observar las convenciones retóricas del discurso en las reuniones: interviene poco, y cuando lo hace suele hacer observaciones directas, muy críticas y hasta crudas, que causan gracia entre el público, pero no serían aceptables en boca de un Secretario General. Su contraparte que tampoco ha llegado a ese cargo, más bien, nunca interviene ni en las raras ocasiones cuando asiste (casi siempre asiste su mujer, que sí interviene y a gritos pero sólo cuando ella tiene algún problema personal): nadie le concibe dirigiendo la reunión, y él y su esposa son de una generación demasiado mayor para haber considerado la posibilidad de dejar a ella ejercer en lugar de su marido (además de que su carácter gritón fue señalado como igualmente inaceptable cuando yo especulaba sobre esa posibilidad con otros comunarios). Tomás, igualmente, fue nombrado varias veces en la primera terna; él salía en segundo lugar (1994, e insis-

tentamente en 2000 y 2002) pero en 2004 al fin llegó a Secretario General. Su conducta exagerada –de la cual conserva el apodo ‘el Loco’, aunque yo, que he debido conocerle ya en su época más calmada, nunca he notado motivos para esa denominación– habría quedado atrás, y pudo cumplir con la expectativa formal.

La participación de las mujeres

Otro de los clisés de la versión normativa es que los cargos se ejercen ‘en pareja’, aunque es el marido cuyo nombre figura en la lista y de hecho, ejerce el cargo; la esposa apenas apoya en tareas prácticas, como cocinar para los asistentes a una reunión si esto es parte de la costumbre local. Por lo general no se suele considerar que ella pueda sustituir al marido si el está enfermo o de otra manera imposibilitado, y sólo después de enviudar el nombre de ella aparece en la lista en su lugar. En Taki-pata, una vez en 2010 se intentó que la esposa del Justicia ocupara el lugar de su esposo que había ido de viaje, pero ella rehusó hacerlo (es cierto que el caso sobre el cual querían que ella decida era muy problemático, tal vez por eso se acobardó). La primera mujer que figura como dirigente no es Vinculación Femenina, sino una viuda nombrada como Hacienda en 1987.⁸ Vinculación Femenina apareció en el año siguiente, e inicialmente no entraba en la elección, sino era nombrado aparte. Sus titulares eran mujeres casadas que no figuraban en la lista aparte de sus maridos, una solterona muy activa, una madre soltera y una separada que sí estaban afiliadas en nombre propio (la separada había reemplazado a su marido en la lista del sindicato cuando éste se fue). En 1992 Actas fue ‘una señorita’, recién salida bachiller en la ciudad de La Paz y calificado como una especie de experimento por Alejandro, Secretario General de ese año. Muy pronto se casó con Miguel y se podría decir que su carrera fue absorbida en la de su marido, aunque posteriormente ella ha sido nombrada para algunos comités no tomados en cuenta aquí. Otra viuda hizo Hacienda ese

año y Relaciones en 1993, y una tercera viuda fue nombrada Vialidad en 1995, pero según sé sus hijos ejercieron en su nombre. Recién en 2006 Vinculación Femenina fue incorporada en el sistema de elección, como parte de la tercera terna de candidatos, junto con Vialidad, Deportes y Vocal. Esto dio lugar al resultado aparentemente contradictorio de que un varón saliera elegido en ese cargo, pero nadie le objetó, ya que el cargo nunca tuvo deberes definidos sino sólo funcionaba como ‘bulto’ –alguien más entre quienes repartir las cuotas cuando los dirigentes tenían que ‘costear’ algo de sus bolsillos o asumir tareas rutinarias como atender a visitantes o supervisar trabajos comunales.

La trayectoria posterior de la participación femenina cae fuera del período estricto de este estudio, pero vale la pena mencionar que una ruptura llegó en 2008 cuando por primera vez una mujer fue elegida como Secretaria General; la misma hizo Secretaria de Organización en 2012 y en 2014 fue elegida Secretaria General de la Central de Mujeres a la cual su sindicato está afiliado. Es casada, pero su marido no es yungueño y trabaja en la ciudad, por tanto, ella figura con nombre propio en la lista. Otra mujer (yo misma) hizo Secretaria General en 2012, y en 2012 y 2014 Relaciones ha sido ocupado por mujeres. Hacienda en 2014 fue ocupado por una mujer que había hecho Vinculación Femenina en 2002. Sólo la madre soltera y la separada mencionadas arriba han hecho suficientes cargos para que valga la pena mostrar sus carreras (Tabla 3):

Tabla 3. Participación femenina en cargos

CLAUDIA	CARLOTA
1988 Educación	1999 Vinculación Femenina
1991 Vinculación Femenina	2003 Vinculación Femenina
2001 Vinculación Femenina	2009 Vialidad
2006 Justicia	2011 Agricultura
	2012 Agricultura (ratificada)
	2014 Deportes (luego trocado a Vinculación Femenina, el varón elegido asumió Deportes)

En 2015 Carlota (la separada) aceptó de nuevo la ratificación para continuar durante un año más como Vinculación Femenina, sólo que ese cargo fue abolido en seguida⁹. Al parecer le gustó la participación sindical de ‘bulto’, ya que nunca se niega al cargo, pero tampoco toma la palabra; de hecho, es famosa por dormir en cualquier reunión. Nada hace pensar que llegará a ser una de las ‘cuatro cabezas’. Claudia sí llegó a Justicia –cargo potencialmente decisivo que ninguna otra mujer ocupó hasta que una la asumió en 2016– pero su ejercicio era totalmente pasivo, dejando que otros resuelvan las quejas; es cierto que la mayor parte de los hombres que llegan a este cargo no son mucho más activos (por miedo a crear mala sangre en caso de emitir una decisión en contra de algún comunario).¹⁰ Luego, por razones de edad, ha dejado de ser considerada para los cargos. Para obtener el carnet de productor de coca, es requisito ser afiliado de la comunidad; marido y mujer pueden tener ambos sus carnets con un solo afiliado, pero si una mujer desea tener carnet y su marido no (o él es de otra comunidad) ella tiene que entrar en la lista. Esto ha ocurrido con varias mujeres jóvenes a partir de 2010 y es de esperar que exista mayor participación femenina en el futuro; también se está empezando a considerar que la esposa puede ejercer personalmente en nombre de su marido, como hizo la Hacienda en 2014.

Conclusiones

Los yungueños suelen utilizar la palabra ‘camino’ –en castellano– al hablar de los deberes sindicales, pero con el significado del ámbito de acción específico de un cargo dado: por ejemplo, cobrar a los ‘negociantes’ (intermediarios) oriundos de otras comunidades que vienen a comprar coca en la comunidad es el ‘camino’ del Presidente de ADEPCOCA, e ir a la Alcaldía para solicitar el tractor que venga a trabajar las carreteras ramales de la comunidad es el ‘camino’ del Secretario de Vialidad. De hecho, cuando en el rato de redactar

este artículo he intentado hablar del *thaki* en el sentido supuestamente clásico en aymara, a parecer no reconocían la expresión. Por supuesto, la ausencia de un término que denomina cierta práctica o conjunto no implica que no se reconozca un concepto correspondiente, sino puede tratar de una categoría no marcada. Considero que este es el caso de lo que he denominado la ‘carrera’ sindical-comunal de un comunario (y en mucho menor grado, o mejor dicho de forma incipiente, de una comunaria) yungueño/a. Todos tienen que ‘servir a la comunidad’ –aunque localmente se prefiere decir simplemente ‘trabajar’ (*luraña* en aymara) y el contexto señala que se está tratando de los cargos comunales; si han ‘descansado’ (quedado en la base sin cargo) durante unos años, hay que nombrarles de nuevo. Nunca he escuchado enunciar explícitamente ‘Cada afiliado debe hacer de Secretario General una vez en su vida’ pero hace tiempo deduje esta norma de los comentarios dispersos sobre el ejercicio sindical, y de las conversaciones informales a partir de septiembre en cada año, cuando se baraja nombres (de los que no han hecho Secretario General) de candidatos posibles para ese cargo en el año que viene. La comunidad se fija en las parejas jóvenes que acaban de establecerse y el flamante marido (o concubino, en términos legales) se presenta al sindicato sin necesidad de ser citado, sabiendo que muy pronto le nombrarían para un primer cargo. De ahí empieza una carrera que durará varias décadas, hasta que su edad y el cumplimiento demostrado le liberen de tener que seguir cumpliendo.

Globalmente, podemos decir que esto corresponde a la ‘norma’ del *thaki* consagrada en las fuentes académicas –desde que se establezca como unidad doméstica conyugal independiente, hay que realizar cargos comunales cada tantos cuantos años en una serie que se completa al realizar el cargo máximo a nivel de comunidad (Secretario General en este caso). La diferencia es que estas carreras reales no siguen un orden jerárquico regular (primer peldaño Vocal, tres años después

Deportes... hasta la grada penúltima que es Relaciones, y entonces al fin Secretario General). Ya me había dado cuenta que no se cumplía con una sucesión tan regular, y que era habitual ocupar cargos más bajos después de haber ocupado la cabeza, pero yo mismo me he sorprendido al rastrear las carreras documentadas de individuos: habían sido mucho más irregulares en la práctica que la impresión vaga y anecdótica que yo conservaba en mi memoria. Los mismos comunarios tienden a recordar un cumplimiento más regular que lo que realmente era (suponiendo que todos empezaron con cargos considerados como iniciales, o que hayan hecho ‘todos’ los cargos cuando sí han hecho varios, pero no *todos*). Un comportamiento muy pasivo y silencioso en las reuniones –asistiendo sin decir nada, o sino mandando a la esposa en su lugar, quien diría aún menos– ayuda a descansar durante un buen tiempo sin ser notado; cumplir al mínimo y de mala gana cuando al fin no puede esquivar el nombramiento también contribuye a ser un candidato impopular que descansaría durante varios años más antes de ser llamado de nuevo, y entonces sería en una terna para cargos inferiores donde su manifiesta mala voluntad y/o incapacidad no causaría retrasos significativos en lograr las metas generales que la comunidad se propone.

Es de notar que, en este sistema, no es aceptable ofrecerse para un cargo, ni siquiera expresar públicamente que uno quisiera ocupar uno u otro puesto, lo que sí era aceptable en Jesús de Machaca y conducía a entrar en ‘la fila’ de los que iban a llegar a ese cargo en los años por venir (‘Yo quiero ocupar ese cargo’, Albó y Ticona 1997:70). Se puede hacer campaña informal entre amigos y familiares, buscando que ellos propongan el nombre de uno en las elecciones y voten a favor, pero el resultado siempre queda sujeto a la voluntad de ‘las bases’ y por tanto puede dar lugar a ‘candidatos sorpresa’ (es como yo les llamo) propuestos en ese mismo momento sin bajeo anterior, pero que ganan la simpatía de suficientes personas como para salir elegidos.

En esto hay una mezcla de factores coyunturales internos –hay una tarea pendiente para la directiva entrante que exige determinadas capacidades y/o conocimientos que sólo algunos tienen, aunque no tengan carrera dirigenal anterior – y externos –se dijo en 2008 ‘es un orgullo para la comunidad’ tener una mujer a la cabeza, como para mostrarse al nivel de progresismo con otra comunidad vecina muy pequeña y recientemente reconocida, pero que el año pasado había tenido una Secretaria General y no sólo eso, sino ella era una afroboliviana de pollera, una especie de doble plus simbólico –‘la diversidad’ en persona– que luego ha llevado a esta mujer a ser primero Secretaria General de la Central Agraria y luego, concejala municipal.

Pues, hay aspectos simbólicos de cada quien que ocupe un cargo; a la vez, hay aspectos técnicos. En tanto que el famoso ‘turno y rotación’ de cargos sigue siendo factible en las comunidades, es porque la mayoría de las tareas de la autoridad son rutinarias –enero, limpiar el área escolar antes del inicio de clases; mayo, ya ha terminado de llover y hay que trabajar los caminos; fin de octubre, se acerca Todos Santos y hay que desyerbar el cementerio ...– o sino, basta con portar los encargos de los demás: la base ha resuelto que esta es la obra que vamos a pedir en el POA de este año, entonces como dirigente sólo me toca ir cada vez a la Alcaldía para insistir al respecto, no he tenido ni tendré que decidir nada yo mismo sobre el tema. Cualquiera puede corresponder con esto como Secretario General.¹¹ Hacienda debe saber sumar y ser honesto en el manejo del dinero, pero los demás miembros de la directiva colaboran en cumplir con esto (o en encubrir la malversación en casos), ya que todos serán culpados si la rendición de cuentas resulta visiblemente deficiente. Actas es el cargo con mayor requisito técnico –alguien tiene que redactar las actas con contenido completo y una letra razonablemente legible, ya que en años posteriores a veces se exige su lectura para constatar resoluciones o compromisos documentados. Cuando Seraffín hizo Actas por última

vez en 2010, protestó diciendo que ya había hecho ese cargo tres veces y no quería, pero en décadas anteriores lo había asumido con todo gusto, al igual que el de Prensa y Propaganda— otro puesto sin definición concreta y que sólo se hizo efectivo cuando lo ocupaba alguien como Serafín que se afanaba en ir a comentar noticias comunales a la Radio Yungas. Hacía gala de sus conocimientos tanto de política como de lecto-escritura, pues no es sorprendente que cada vez le hayan nombrado como Actas, incluso en 1984 haciendo que reemplace en ese cargo a Pablo, elegido pero analfabeto funcional.

En el curso del tiempo, se observa una elaboración cada vez mayor de las actas del sindicato: en los primeros años apenas se redactaba una ‘acta de reorganización’ detallando los miembros de la nueva mesa directiva y casi nada más en el resto del año. Ya entrando al siglo XXI, se redacta un acta de cada reunión ordinaria y extraordinaria, resumiendo no sólo las resoluciones o conclusiones finales sino los debates que los procedían. Existe la opción de redactar las actas por parte de otro dirigente (cuando Gabriel hizo Actas en 2006, el entonces Vialidad, migrante de retorno de El Alto, se los escribió) pero mayormente optan para buscar un dirigente que sea capaz de redactar sus propias actas y si es necesario, cambiar los resultados de la elección (como en 1984, cuando Pablo fue elegido como Actas, pero alejado de la posesión a favor de Serafín, elegido como Deportes). Aunque el voto popular es supuestamente supremo, se reconoce a la directiva entrante el derecho de hacer cambios internos, es decir, trocar los puestos entre los miembros elegidos si es evidente que el ocupante de tal puesto no tiene las condiciones para cumplir con su ‘camino’ específico. Así, en 2014 Justicia fue asumido por un ex Secretario General, mientras la persona a quien le correspondía por votación, una mujer recién separada cuya experiencia anterior se limitaba a ser tesorera de aguas potables —y eso en nombre de su madre socia, Claudina— pasó al cargo de Relaciones, puesto

que formalmente no exige casi nada excepto cuando el General esté enfermo o por algún motivo ausente; entonces dirige la reunión en su lugar, y en el caso excepcional de que sea removido del cargo, tiene que asumir como Secretario General por el resto de su gestión. Pero las actividades de la mayoría de los cargos no están definidas con precisión y cualquier puede ocuparlos; lo que importa es ‘apoyar’ al Secretario General en cualquier propuesta o proyecto de coyuntura, y aparte de eso, asistir sin falta a todas las reuniones y otras actividades sindicales de cualquier tipo. Esta indefinición práctica de los cargos puede tener que ver con la inexistencia práctica de un orden de cumplimiento entre ellos: dejando de lado un coto de responsabilidades de determinados cargos (como que Hacienda tiene que manejar la plata y rendir cuentas de la misma, etc.) todos participan en la gestión comunal, entonces no importa si lo estoy haciendo en un cargo superior o inferior siempre que contribuya.

Aún así, puede persistir la normativa vagamente expuesta de que se empieza con los cargos menores —Vocal, Deportes— para luego subir a un cargo del medio, sería Organización o Hacienda, y de ahí a la cabeza ... sin duda, en tanto que el antropólogo presione más a sus informantes para que le den una descripción ordenada de la forma de cumplir con los cargos, y ellos se sientan obligados a cumplir con esto y hasta motivados a hacerlo ellos mismos —como intelectuales orgánicos y/o representantes de sus comunidades, su región, su cultura— es más probable que entre todos van a construir un esquema normativo —no descriptivo— del sistema de autoridades. Está bien que un investigador exponga tal esquema normativo —siempre que señale que es normativo, para luego examinar en qué aspectos la práctica corresponde, o no, a esas normas y por qué. La mayoría de los estudios de la política comunal andina han quedado en recoger las versiones normativas y presentarlas como sinónimos de la práctica. Dan por supuesto su cumplimiento, y cuando han chocado con datos empíricos

que evidencian que no es así, suponen que esto es algo muy reciente y en todo caso, debido a intervenciones externas. Yo nunca tomé el sistema político como tópico central de mis investigaciones y por tanto, sólo recogía comentarios espontáneos y tangenciales al respecto; después planté un cocal en la comunidad y empecé a participar activamente en sus relaciones políticas –una historia accidentada que incluye haber sido Secretaria General en 2012 y otros cargos fuera de la directiva sindical antes y después de eso. Ahora me doy cuenta que mi carrera sería un caso extremo, pero no fuera del marco global de las carreras de autoridad comunal en los Yungas, donde ese ideal del *thaki* como el ascenso pausado de una gradería jerarquizada con un culmen final no se aplica, aunque tal vez existe como un modelo abstracto que nadie espera ni intenta hacer realidad.

Vale la pena mencionar que dentro de su región –al menos, los doce sindicatos que conforman la Central a la que está afiliada– la comunidad de estudio está considerada como ‘unida’ y ‘estricta’. Es decir, exige a sus afiliados de base cumplir con todos sus deberes si quieren ser reconocidos como tales; además, sus miembros son realmente campesinos *cocaleros* en ejercicio (y no ‘residentes’ oriundos del lugar que ahora viven en la ciudad, comerciantes que buscan la afiliación nominal para entrar en el negocio de la coca, etc.). Desde la perspectiva local es lo opuesto a ‘aculturizado’ sin más bien es ejemplar. Pues ¿que me expliquen la ausencia de un *thaki* donde se va cumpliendo cargos en orden desde los más bajos hasta el más alto! Y si insisten que esto *es* la realidad ¿que lo fundamentan con datos de comunidad que demuestren que allá Pedro (y Marcos, Lucas y Juan) sí han empezado con el cargo de Vocal –o Deportes o el que ellos consideran inicial– en tal año, luego hizo Vialidad en otro año, y así sucesivamente hasta llegar a Secretario General veinte o más años después de haber iniciado su carrera! En caso de haber encontrado algún caso así, deben complementarlo con otros para comprobar

que el primero no fue algo excepcional, sino la ruta seguida por todos, excepto tal vez los excluidos por solterón, discapacitado, etc. como he comentado arriba.

Hace ya casi un siglo, Malinowski indicó como una regla de la investigación antropológica tomar las descripciones de la práctica –y de por qué se hacía de esa manera– ofrecidas por los informantes, no como retratos de la práctica tal como es, sino como otros datos para incluir con los obtenidos por el mismo investigador observando esas prácticas, como insumos para un análisis global –antropológico– del mismo. Lo que dicen los informantes sobre lo que hacen y por qué lo hacen, no es una referencia objetiva directa al respecto, sino un componente del conjunto de datos que se requiere para un análisis completo. Una descripción del sistema político –lista de cargos, forma de elección, etc.– no informa sobre la operación de ese sistema en el día a día; un antropólogo tiene que ir más allá que reproducir las palabras de sus informantes y dar por verdad su contenido de superficie. Es válido registrar y difundir la versión de los informantes sobre su sistema político, siempre que se lo ubique como lo que es y se lo triángule con datos sobre el mismo tema, pero de otras fuentes, o sino, mínimamente se analice el sitio de enunciación de la fuente utilizada. Sabemos que la vasta mayoría de los sistemas de autoridad comunal en el Altiplano Norte, hoy en día, son básicamente del sindicalismo agrario, no importa los nombres que actualmente usen (Chuquimia et al. 2010:65 para un ejemplo en el nivel de comunidad de base, Rivera 2014:50 con referencia a la estructura supracomunal). El sindicalismo agrario, con su estructura de subcentrales y centrales, efectivamente construyó un marco político con alcance regional que vino a recuperar el nivel de las jurisdicciones de los caciques mayores deshechos ya entrando al siglo XVII, pero en base a unidades territoriales y administrativas surgidas en siglos posteriores.

Hay mucho más para debatir sobre este tema: las variantes locales de la jerarquía de

cargos; la cuestión de los hijos que ejercen el cargo en nombre de su padre; las exigencias y requisitos para ‘sindicalizarse’ (entrar en la lista de la comunidad) según la región; las diferentes formas de elección o nombramiento para los cargos y sus consecuencias respecto a quién llega a ejercer tal o cual cargo, el significado de ‘jóvenes’ en los cargos –que no refiere estrictamente a la edad y tampoco se limita a solteros, sino tiene que ver con transiciones generacionales– entre otros. La mayoría de los estudios existentes se limitan a exponer la normativa de autoridad comunal; me pregunto si tal normativa, aparentemente tajante y explícita, circula habitualmente en las comunidades, o habría sido enunciada en respuesta a la insistencia del investigador, y además quiénes la habrían enunciado (apostaré que eran varones para empezar). Si resumo los resultados de mi análisis de los datos de Takipata, vemos que: (1) existe un orden jerárquico de los cargos, aunque no está de todo claro; (2) los individuos no están obligados a asumir cargos en un orden que corresponde a esa jerarquía formal, y de hecho asumen en un orden que refleja los caprichos de la votación más que una evaluación de su capacidad para el cargo en consideración o los cargos que aún no haya hecho (3) es posible repetir algunos cargos, como también nunca hacer otros; lo fundamental es cumplir con las obligaciones del colectivo; (4) según la norma o ideal el único cargo que todo comunario debe cumplir es el de Secretario General, pero hay los que nunca llegan a ocuparlo; eso no importa siempre que cumplan según el punto (3) al fin, podemos decir que no hay un *thaki* –en tanto que esto significa un ordenamiento de obligaciones individuales– sino un compromiso general con la comunidad, cuyo cumplimiento específico –cuáles cargos– varía según el caso y el contexto. En todo caso, considero que el modelo del *thaki*, como una serie fija de cargos comunales que todos los miembros tienen que seguir para quedar luego dispensados de más obligaciones y a la vez considerados como consejeros sabios, es

completamente irreal. Ahora dejo a mis lectores demostrar con ejemplos la vigencia –o no– de ese modelo del *thaki* en otras comunidades andinas contemporáneas.

Referencias Citadas

- Astvaldsson, A.
1994 *Wak'a: an Andean religious concept in the context of Aymara social and political life*. Tesis doctoral, King's College, Londres.
- 2000 *Las voces de los wak'a. Jesús de Machaca: la marka rebelde 4*. CIPCA, La Paz.
- Albó, X. y E. Ticona
1997 *La lucha por el poder comunal. Jesús de Machaca: la marka rebelde 3*. Cedoim/ CIPCA, La Paz.
- Colque, G. y J. Cameron
2009/2010 El difícil matrimonio entre la democracia liberal e indígena en Jesús de Machaca. En *Reconfigurando territorio: Reforma Agraria, el control territorial y los indígenas o gobernadores en Bolivia*, J.P. Chumacero (comp), pp. 173-208. Fundación Tierra, La Paz.
- Cussi, S., D. Calle y A. Mamani
1999 *Nayaruxa chuymaxa ususkakituwa*. A mí me sigue doliendo el corazón. En *Doce experiencias de desarrollo indígena en América Latina*, Carrasco, Iturralde, Uquillas (coordinadores), pp. 59-74. Fondo Indígena, La Paz.
- Chuquimia, G.
2006 *Repensando la democracia desde el ayllu. De la condición democrática en crisis a la idea de la comunidad en la política*. Sin editorial, La Paz.
- Chuquimia, G., R. Chambi y F. Claros
2010 *La reconstitución del Jach'a Suyu y la nación Pakajaqi. Entre el poder local y la colonialidad del derecho indígena*. PIEB, La Paz.
- Fernández Droguett, F.
2016 Indianización y la municipalización de lo aymara en Bolivia: el caso de Jesús de Machaca. *Chungará*. Publicado en línea 22 junio 2016, pp. 1-11.

- Frías Mendoza, V. H.
2002 *Mistis y mokochinches. Mercado, evangelistas y política local en Calcha*. Editorial Mama Huaco, La Paz.
- Orta, A.
2013 Forged communities and vulgar citizens: autonomy and its limits -in semineoliberal Bolivia. *The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology*, March 2013, pp. 108-133
- Plata Quispe, W., G. Colque Fernández y N. Calle Pairumani
2003 *Visiones de desarrollo en comunidades aymaras. Tradición y modernidad en tiempos de globalización*. PIEB, La Paz.
- PROA
1999 *Los aymaras de Machaca*. Justicia Comunitaria 1. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos/Banco Mundial, La Paz.
- Quisbert, M., F. Callisaya y P. Velasco
2006 *Líderes indígenas. Jóvenes aymaras en cargos de responsabilidad comunal*. PIEB, La Paz.
- Rasnake, R.
1989 *Autoridad y poder en los Andes. Los kuraqkuna de Yura*. Hisbol, La Paz.
- Rivera, S. y Equipo THOA
1992 *Ayllus y proyectos de desarrollo en el Norte de Potosí*. Aruwiyiri, La Paz.
- Rivera, S.
2014 El THOA y la reconstitución de los ayllus. La Paz: *La voz de la cuneta* 5-6.
- Spedding, A.
2016 ¿Cosmopraxis, conciliación o cobardía? Análisis de unos Libros de Justicia en los Yungas. *Temas Sociales* 38: 215-267.
- personalmente no me convencen las conclusiones de este trabajo, merece destacar que el autor hace explícito que está presentando una construcción y no una descripción transparente y directa de la realidad, a diferencia del resto de los estudios que comentaré. Se agradece a Denise Arnold para destacar estos aspectos del trabajo de Astvaldsson.
- 2 Resulta que es citado insistentemente como referencia sobre el sistema de cargos en –entre otros– Plata, Colque y Calle (2003), Colque y Cameron (2009/2010), Orta (2013) y Fernández Droguett (2016), mientras ninguno de estos autores posteriores comenta la indefinición temporal de las descripciones consagradas por Albó y Ticona.
- 3 Seudónimo.
- 4 Coloco esta palabra entre comillas para indicar que refiere a juventud en términos de ciclo de vida y no edad cronológica, ya que tales personas pueden tener más que treinta años; lo que les hace ‘jóvenes’ es que sean entre recién casados y matrimonios con hijos llegando a la adolescencia, pero de ninguna manera han llegado a tener nietos, algo que a la vez puede ocurrir ya a los 40 años si tanto los padres como los hijos empiezan a procrear entre los 18 y 20 años.
- 5 Asociación Departamental de Productores de Coca, a la cual la mayoría de los comunarios y comunarias están afiliadas. Otorga el carnet de productor que permite llevar coca en cantidad al Mercado de Villa Fátima y comercializarla allí. Su directiva consiste en Presidente, Actas y Tesorero, y estos cargos, al igual que los tres equivalentes en el comité de aguas potables, se asumen ‘por lista’. Las listas de socios de estas organizaciones son inalterables; cada año se nombra las siguientes tres personas en la lista después de las que acaban de hacer los cargos y luego se vota para determinar cuál cargo va a ocupar cada uno. Hasta la fecha (2015) la cantidad de socios que va en lento crecimiento es tal que nadie ha tenido que repetir estos cargos. Su alcance restringido y utilitario les quita valor político como un elemento que sirve para poder aseverar que uno ha ‘servido a la comunidad’; a mi parecer, también valen menos porque el nombramiento es más o menos automático según la lista y no depende de ser propuesto como candidato por la base, como se hace para la directiva sindical y la junta escolar, pues este último, aunque también de ámbito restringido y utilitario, sí es valorado como ‘servir a la comunidad’.

Notas

- 1 El investigador entrevistó a personas mayores (de 50 a 90 años aproximadamente, varones) sobre lo que recordaron de ritos y cargos que ya no están vigentes, y complementó estos datos con otras entrevistas hechas por su ayudante de campo Félix Laymi. Luego volvió con sus primeros informantes para contrastar la nueva información, y en base a todo eso confeccionó su versión ideal. Aunque
- 6 Todos los nombres son seudónimos.
- 7 Orta (2013:120) cita un informante de Jesús de Machaca que expresa que ‘los que siempre hablan’ (*those who always speak*) son escogidos para cargos superiores, en este caso “subcantoniales, cantoniales” que refiere a los cargos superiores en el mencionado Cabildo, aunque es significativo que este informante sigue usando sus nombres antes de ser

- 're-indigenizado', de la misma manera que menciona "secretarios generales" como un cargo que se debe cumplir antes de llegar al nivel superior.
- 8 Las mujeres yungueñas suelen pronunciar 'No hay que dar dinero a los hombres' como si fuera el oncenno mandamiento; así que este cargo es muy apropiado para una mujer, aunque no fue si no hasta 2014 que otra llegó a ocuparlo.
 - 9 El motivo era que, según el Secretario General, las mujeres ya tenían 'su sindicato' y su propia Secretaria General, entonces ya no necesitaban ser representadas en el sindicato a través de ese cargo y tampoco nombradas para cualquier otro puesto en la directiva. Tal 'sindicato de mujeres' no llegó a funcionar y de hecho, parece que en realidad era sólo un comité nombrado para un proyecto de viviendas del PAC II que estipulaba que mujeres tenían que figurar como beneficiarias. Los alcances de la organización paralela de mujeres en Sud Yungas es tema de otro trabajo de investigación actualmente en curso.
 - 10 Ver Spedding (2016) para un análisis detallado de las dificultades de administrar 'justicia comunitaria' en la práctica.
 - 11 Mientras al nivel del municipio, como constan Colque y Cameron (2009/2010) para el supuestamente emblemático municipio indígena de Jesús de Machaca, la rotación de autoridades resulta ser una tara, porque significa que cada año los nuevos entrantes tienen que familiarizarse con los procedimientos; apenas tienen unos meses de ejercicio efectivo, luego se van y hay que iniciar el proceso de aprendizaje con otro grupo. A la vez, estos autores consideran que la rotación es inevitable en tanto que estas autoridades tienen que financiar sus actividades con sus propios recursos, ya que es difícil aguantar los gastos requeridos durante más que un año.